

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintidós (2022) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Auto Interlocutorio No. 110

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORALES
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2021-00581-00
DEMANDANTE:	LUIS EDUAR RODRIGUEZ GONZALEZ Correo: jrgranja2014@gmail.com ; abogadoraphaelgranja@hotmail.com
DEMANDADO:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF y la ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL PARA SERVICIO INTEGRAL DE LA FAMILIA “CRECER EN FAMILIA” Correo: notificaciones.judiciales@icbf.gov.co ; carlos.bravo@icbf.gov.co ; atencionalciudadano@icbf.gov.co ; crecefamilia@hotmail.com ; crecerenfamiliatalentohumanohv@gmail.com ; crecerfamilia-talentohumano@hotmail.com ; crecerfamiliadisciplinariogh@gmail.com
ASUNTO	REMITE POR COMPETENCIA

El señor **Luis Eduar Rodríguez González**, a través de apoderado judicial¹ mediante el ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, demanda al **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y la Organización No Gubernamental para Servicio Integral de la Familia “Crecer en Familia**, con la cual pretende la declaratoria de nulidad de los siguientes actos administrativos:

- Acto administrativo nro. 202060200000182841 del 23 de diciembre de 2020, expedido por el Director del ICBF, por medio del cual se da respuesta negativa a la reclamación administrativa laboral con radicado nro. 20206050000090232 el 28 de octubre de 2020, tendiente a obtener el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las acreencias derivadas de la misma.
- Acto administrativo de fecha 28 de diciembre de 2020, expedido por la Representante Legal de la ONG en Familia, por medio de la cual se da respuesta la reclamación administrativa presentada el 28 de octubre de 2020, tendiente a obtener el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las acreencias derivadas de la misma.

De igual forma, solicito entre otras cosas que se declare: - la ineficacia de la terminación del vínculo laboral del demandante y las demandadas; - que la ONG Crecer en Familia actuó como simple intermediaria; - que existió una relación de trabajo personal subordinado desde el 16 de diciembre de 2013 hasta el 12 de abril de 2018; - que el demandante antes de la terminación de la relación legal y reglamentaria quedo investido del fuero de estabilidad laboral reforzada; - que no hubo solución de continuidad en la prestación

¹ Ver AD en Sharepoint

personal del servicio; - que el demandante tiene derecho al reintegro o reinstalación en el cargo de formador.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a las entidades demandadas: - al pago de la nivelación, al código y grado equivalente al que existía o debió existir en la planta de personal del ICBF desde el 16 de diciembre de 2013; - al pago del reajuste de los salarios durante los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; - al pago pleno de las prestaciones sociales de carácter legal y convencional desde el 16 de diciembre de 2013 hasta el 12 de abril de 2018; - al pago a título de indemnización de la diferencia de los porcentajes de cotización correspondientes a seguridad social, en pensión, salud y riesgos profesionales; - al pago de la indemnización de la diferencia de las cotizaciones de Caja de Compensación Familiar y Subsidio Familiar; - a consignar a un fondo las cesantías causadas desde el año 2013 a 2018 y su respectiva sanción; - al pago de la seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales); - al pago de la indemnización moratoria; - al pago de las sumas equivalentes al suministro de calzado y vestido de labor; - a reintegrar o reinstalar al demandante en un cargo de igual o superior categoría; - al pago de la indemnización equivalente a 180 días salarios.

Como pretensiones subsidiarias, solicito reconocimiento y pago de perjuicios morales, perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, lucro cesante consolidado y futuro.

Al momento de estudiar la competencia funcional se debe analizar de manera individual cada una de las pretensiones y así determinar si es dable admitir o no la demanda.

El artículo 155 numeral 2 del CPACA establece que:

“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. <Artículo modificado por el artículo 30 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:>
Los juzgados administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(...)
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (...).”

Para efectos de establecer la cuantía, el artículo 157 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, dispuso las siguientes reglas:

“ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA.
(...)

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, que tomará en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, causados hasta la presentación de aquella.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.”

En el presente asunto, la parte demandante estima la cuantía de la siguiente manera: 1) por la indemnización moratoria por el no pago de los salarios desde la fecha del retiro del servicio hasta la fecha de la presentación de la solicitud de conciliación (36 meses), en un valor total de **\$30.240.000**. 2) Entre tanto, por la indemnización moratoria establecida en el Decreto 797 de 1949, durante el mismo periodo la establece un valor de **\$28.336.000**.

Estableciendo finalmente como pretensión mayor la sumatoria de las dos pretensiones para un total de **\$73.762.300**; sin embargo, al revisar la normatividad enunciada es evidente que en el presente caso la pretensión mayor corresponde a lo solicitado por indemnización moratoria por el no pago de los salarios, es decir a \$30.240.000, valor que evidentemente no supera el correspondiente a 50 SMLMV².

Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 168³ del CPACA se ordenará remitir el expediente por competencia al Juez Administrativo del Circuito de Cali – Reparto, quien deberá observar el inciso tercero del artículo 139⁴ del CGP aplicable por remisión expresa del artículo 306⁵ del CPACA.

En consecuencia; se,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE COMPETENCIA, en razón de la cuantía, para tramitar el presente proceso, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO. REMITIR por competencia en razón a la cuantía al Juez Administrativo del Circuito Judicial de Cali (REPARTO), las presentes diligencias.

TERCERO. Por secretaria de esta Corporación realizar las anotaciones pertinentes en el sistema Judicial SAMAI.

CUARTO. Los escritos deberán ser remitidos al correo electrónico: rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co, **identificando la radicación completa del expediente, el magistrado ponente, el medio de control, las partes y el asunto, so pena de no gestionar el memorial.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT
Magistrado

Elab. Yurani López

² Salario mínimo 2021 \$908.526.000 * 50 = \$45.426.300

³ **ARTÍCULO 168. FALTA DE JURISDICCIÓN O DE COMPETENCIA.** En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión.

⁴ **ARTÍCULO 139. TRÁMITE.** Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso.

El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.

El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.

El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.

Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.

La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces.

⁵ **ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS.** En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.